

Señores

JUZGADO PRIMERO (1°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA (V)

j01advobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**
PROCESO: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO: 76111-3333-001-**2018-00225**-00
DEMANDANTES: MARIA ELIDA CASTAÑO ARIAS Y OTROS
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE TULUA Y OTRO.
LLAMADO EN GTÍA.: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de la compañía **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** mediante el presente escrito procedo a **REASUMIR** el poder a mi conferido en el proceso de la referencia, y a presentar dentro del término de Ley, **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**, solicitando desde ya se profiera sentencia favorable a los intereses de mi representada, negando las pretensiones de la demanda por no demostrarse la responsabilidad civil que el líbello inicial endilgó a la parte accionada, **JOSE TAFUR OREJUELA** con fundamento en los argumentos que concretaré en los acápite siguientes:

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD

En la audiencia celebrada el 28 de agosto de 2024, el despacho declaró clausurada la etapa probatoria y se concedió el término de 10 días siguientes a la celebración de la misma para presentar los alegatos de conclusión. En ese sentido, dicho término transcurrió los días 29, 30 de agosto, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y **11 de septiembre** (los días 31 de agosto 1, 7 y 8 de septiembre no se cuentan por ser días no hábiles), por lo que se concluye que este escrito es presentado dentro del tiempo previsto para tal efecto.

CAPÍTULO II. ANÁLISIS PROBATORIO FRENTE A LA DEMANDA

Es importante precisar que el objeto del litigio aquí ventilado corresponde al fijado por el despacho en audiencia inicial, en los siguientes términos:

Se trata de dilucidar si en el presente caso se estructuran los elementos necesarios para declarar administrativamente y patrimonialmente responsables a la entidad demandada y/o vinculado por el daño antijurídico que se concreta en la muerte del señor Carlos Enrique Flórez Quintero, acaecida el día 07 de junio de 2016, cuando presuntamente fue arrollado por tres vagones que se habrían desprendido de un automotor o maquinaria de propiedad del vinculado, y si como consecuencia de tal declaración en menester ordenar

el resarcimiento de los perjuicios de orden material e inmaterial que presuntamente se le ocasionaron a la parte demandante. De ocurrir lo anterior, deberá resolver el despacho si es menester condenar a la llamada en garantía al pago de las sumas por las que resulte condenada su llamante, en las condiciones y proporción pactadas en el contrato de seguro acordado entre ellas

O si no obstante la ocurrencia del mencionado accidente es menester declarar probadas excepciones de mérito propuestas por quienes integran el extremo pasivo de la relación procesal, tales como falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de elemento configurativo de falla del servicio, hecho de un tercero, propia culpa y/o caso fortuito o cualquiera de las propuestas¹.

A partir de dicho problema jurídico, debe precisarse que el presente escrito tiene como fin indicar que durante el trámite probatorio se logró acreditar que no hay responsabilidad del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** con relación al fallecimiento del señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** toda vez que no se estructuraron los elementos *sine qua non* de la responsabilidad en cabeza del mencionado anteriormente, máxime cuando se acreditó la configuración de las causales de exoneración de responsabilidad denominadas hechos de un tercero y culpa de la víctima.

A. SE ACREDITÓ LA AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE ACREDITEN LA OCURRENCIA DEL HECHO EN LA FORMA COMO LO MANIFIESTA LA PARTE DEMANDANTE.

La parte actora no acreditó las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente ocurrió el accidente. De tal suerte los únicos documentos que la parte actora logró conseguir en el decurso procesal fue el Informe policial de accidente de tránsito y el concepto técnico de accidente de tránsito. Documentos que estuvieron lejos de acreditar la ocurrencia del hecho en la forma en la que lo narro la parte actora. Por lo tanto, el despacho deberá negar las pretensiones de la demanda.

En el caso *sub examine*, la parte actora fundamentó todas las valoraciones de culpa en el Informe de Tránsito del accidente del 7 de junio de 2016. Al respecto, es necesario poner de presente que este documento carece del valor probatorio que le ha otorgado la parte actora, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad. Máxime cuando no se practicaron testimonios u otros medios probatorios que permitiesen cotejar la información ahí plasmada.

El agente que lo elaboró no fue testigo presencial del suceso, en consecuencia, sus conclusiones son meras observaciones e hipótesis, las cuales dejan en entredicho la veracidad de lo sucedido con este caso, situación que genera la presencia de irregularidades, lo que demuestra una clara inexistencia de prueba concluyente de responsabilidad por los aquí demandados.

Igualmente, es importante reseñar que **el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad**, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

“Artículo 149: El informe contendrá por lo menos:

¹ Acta de audiencia inicial No. 028 del 22 de abril de 2024.

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.
Clase de vehículo, número de la placa y demás características.
Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.
Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.
Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.
Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.
Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.
Descripción de los daños y lesiones.
Relación de los medios de prueba aportados por las partes.
Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

[...]

Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes. (negrita fuera del texto original)

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

“ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.”

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis, ya que solo se trata de un criterio orientador de la investigación, pero no es prueba, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad. Máxime cuando este por si solo no tiene la dimensión de acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurre un accidente, por lo que es necesario cotejar su información con otros medios probatorios, pero tal situación brilló por su ausencia.

Frente a este asunto ha dicho la H. Corte Constitucional que,

“(…) El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito **no es un informe pericial**, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, **que no son los establecidos por el**

CPG o el CPACA para este tipo de prueba (...)²Negrita por fuera del texto original.

De tal suerte, dicho documento no es prueba suficiente ni mucho menos determinante sobre la génesis, desarrollo y desenlace de los hechos reprochados; por ende, no puede válidamente esperar el accionante que dicho informe sea suficiente para acreditar la responsabilidad civil extracontractual que en este punto se pretende en contra del señor TAFUR.

Por otro lado, el concepto técnico de accidente de tránsito fue elaborado bajo puros y meros supuestos, pues el señor Álvaro Hernán Cifuentes Noreña no cuenta con los estudios profesionales para emitir este tipo de conceptos, además nunca acudió al sitio de los hechos, no analizó los vagones y vehículos involucrados en el hecho, tampoco utilizó metodologías técnicas o científicas comprobadas o legalmente permitidas para finalmente emitir un verdadero concepto, pues este únicamente se basó en el informe policial de accidente de tránsito. Al respecto en la audiencia de contradicción del concepto, el técnico señaló lo siguiente:

“(…) ¿Cuál es la prueba y donde se encuentra, que usted haya ido al sitio de los hechos y para el momento de los hechos no haya existido señalización? Responde: cuando se aporta el croquis no dice que había señalización, **él no fue al sitio** (...) ¿Usted tomó eso del informe de tránsito? Si (...) ¿Usted corrobora que efectivamente se haya partido o dañado el pasador de la moñonera o solo se basó en croquis o IPAT? Solo del IPAT (...) ¿Usted tiene algún estudio profesional o especializado en la tenicomecánica de vagones y trenes cañeros? No (...)

Es decir que quien elaboró el concepto técnico de accidente de tránsito no tiene las calidades de experto en el tema, pues únicamente aprovechó su poco conocimiento empírico por haber sido agente de tránsito para apresuradamente y sin soportes probatorios endilgar responsabilidad al propietario de los vagones, el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**. Por lo anterior, el despacho deberá pasar por alto el contenido del informe por cuanto el mismo no fue expedido por una persona experta en accidentes de tránsito.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga procesal de acreditar los elementos de convicción suficientes para que el juez pueda establecer la existencia de responsabilidad en cabeza de quien se endilga, la tiene la parte demandante. Esta circunstancia, evidencia el claro abandono de la parte activa en la demostración del hecho. No puede aspirar la actora que con la simple y vaga narración que sintetiza en la demanda, se condene como patrimonialmente responsable a las demandadas. Es su indelegable deber el acreditar con todos los medios de prueba legalmente permitidos, el acaecimiento del hecho tal como lo refiere en la demanda.

La incertidumbre que la ausencia de pruebas implica, debería ser razón suficiente para que el Juzgador falle en contra de sus pretensiones. Si el actor no se encarga de dejarle claro al censor, a través de las pruebas del caso, cuál fue la conducta que desplegó el accionado y que amerita el reproche judicial, imposible le resultará al administrador de justicia, resolver a favor de sus requerimientos. Se insiste en que la carga probatoria que le asiste al rol del demandante es de extrema exigencia, pues en su cabeza se encuentra radicada la obligación de incorporar a la causa, las debidas evidencias de todas y cada una de las manifestaciones que realice.

² CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-475 del 2018, M. P.: Dr. Alberto Rojas Ríos.

En conclusión, observando que los medios de prueba que se arrimaron al expediente no son claras al identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que aparentemente ocurrieron los hechos acaecidos el día 7 de junio de 2016 no queda más que el H. Despacho niegue las pretensiones de la demanda por no existir la conducta omisiva, negligente o descuidada de los aquí demandados.

B. SE ACREDITÓ LA AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD POR ENCONTRARSE CONFIGURADAS LAS CAUSALES DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

La ocurrencia del accidente acaecido el día 7 de junio de 2016 no es atribuible al señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**. Al contrario, como se detallará en líneas siguientes, de acuerdo con el material probatorio recaudado, se tiene acreditado que éste ocurrió como consecuencia de un caso fortuito y hecho de un tercero. Lo anterior, toda vez que, en primer lugar, gracias al “*concepto técnico de accidente de tránsito*”³ aportado por la parte actora, se logró evidenciar que, en el sitio, vía y/o sector donde aparentemente ocurrió el accidente no existió señales de tránsito que advirtieran a los transeúntes, conductores y demás, sobre el tránsito constante de maquinaria pesada tal y como se consigna en el manual de señalización el cual se encuentra a cargo de las autoridades locales. En segundo lugar, se trató de un hecho imprevisto porque los vagones previamente ya habían sido sujetos de mantenimiento y no existió ni dudas sobre su funcionamiento, es decir no se encontró algún elemento que advirtiera alguna inconsistencia. En ese sentido, esta situación exonera de todo tipo de responsabilidad al señor **TAFUR**.

Ahora bien, habiendo enfatizado en lo anterior, ruego al despacho tener en cuenta que el Consejo de Estado ha indicado que, cuando sobrevenga algún evento irresistible, imprevisible o exterior a la voluntad del demandado, como efectivamente se ha suscitado en este asunto, se rompe el nexo causal indispensable para que se configure la responsabilidad. Para tal efecto el órgano de cierre de esta jurisdicción ha señalado lo siguiente frente a los eximentes de responsabilidad⁴:

CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD - Efectos La jurisprudencia nacional ha reconocido la existencia de cuatro causales que impiden la imputación de responsabilidad a la administración, a saber: fuerza mayor, **caso fortuito, hecho de un tercero** y hecho de la víctima. **En efecto, los aludidos eventos “dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo.** (negrilla y subrayado por fuera del texto original).

Ahora bien, aterrizando lo señalado anteriormente, el material probatorio obrante en el plenario fue acorde y coincide con la ausencia de nexo de causalidad para acreditar responsabilidad en cabeza del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**, en especial, lo señalado en el informe policial de accidente de tránsito del 7 de junio de 2016, el concepto técnico y los testimonios rendidos, tal y como se indica a continuación:

Obra en el plenario el “*concepto técnico de accidente de tránsito*”⁵ donde se puede evidenciar lo siguiente:

³ Concepto técnico de accidente de tránsito, elaborado por Álvaro Hernán Cifuentes Noreña. 18 de diciembre de 2023.

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Radicado: 73001-23-31-000-1999-00265-01(19548)

⁵ Concepto técnico de accidente de tránsito, elaborado por Álvaro Hernán Cifuentes Noreña. 18 de diciembre de 2023.



Álvaro Hernán Cifuentes Noreña
Técnico en accidentes de tránsito y seguridad vial
"Su seguridad en la vía es mi prioridad"

1.2 La avenida Kennedy frente a los Olivos del municipio de Tuluá – Valle que corresponde al lugar del accidente, es la zona por donde ingresan al casco urbano de la Municipalidad de Tuluá - Valle esta maquinaria agrícola con vagones metálicos que son normalmente utilizados por la industria de la caña de azúcar para su transporte y que conforme al informe de accidente de tránsito:

No habían reguladores de tránsito de seguridad para dicho sector, como tampoco señales de tránsito que advirtieran sobre la circulación de esta clase de maquinaria agrícola, lo cual, quedó consignado de la siguiente manera:

vía 1 2		vía 1 2		vía 1 2	
MATERIAL ORGÁNICO		D. SEÑALES HORIZONTALES		F. DELINEADOR DE PISO	
MATERIAL SUELTO		ZONA PEATONAL		TACHA	
SECA		LÍNEA DE PARE		ESTOPEROS	
OTRA _____		LÍNEA CENTRAL AMARILLA		TACHONES	
7. COMBINACIONES DE SEÑALES		CONTINUA		BOYAS	
A. CON		SEGMENTADA		BORDILLOS	
BUENA		LÍNEA DE CARRIL BLANCA		TUBULAR	
OTRA _____		CONTINUA		BARRERAS PLÁSTICAS	
B. SIN		SEGMENTADA		HITOS TUBULARES	
7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO		LÍNEA DE BORDE BLANCA		CONOS	
A. AGENTE DE TRÁNSITO		LÍNEA DE BORDE AMARILLA		OTRO _____	
B. SEÑAL ORD		LÍNEA ANTIBLOQUEO			
OPERANDO		FLECHAS _____		8. OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	
INTERMITENTE		LEYENDAS _____		A. NORMAL	
CON DAÑOS		SÍMBOLOS _____		B. DISMINUIDA POR	
APAGADO		OTRA _____		CASITAS	
OCULTO		E. REDUCTOR DE VELOCIDAD		CONSTRUCCIÓN	
C. SEÑALES VERTICALES		BANDAS SONORAS		VALLAS	
PARE		RESALTO		ÁRBOLES VEGETACIÓN	
CEDA EL PASO		MÓVIL		VEHÍCULO ESTACIONADO	
NO GIRE		FUD		ENCANDILAMIENTO	
SENTIDO VIAL		SONORIZADOR		POSTE	
NO ADELANTAR		ESTOPEROL		OTROS _____	
VELOCIDAD MÁXIMA		OTRO _____			
OTRA _____					
NINGUNA					

1.3 La falta de regulación y seguridad vial en el tránsito en el sector Kennedy frente a los Olivos del municipio de Tuluá – Valle que corresponde al lugar del accidente, en cuanto al ingreso de maquinaria agrícola con vagones metálicos al casco urbano del municipio y el peligro que aquello representa, fue objeto de publicación y descontento social en un medio masivo de comunicación del municipio de Tuluá Valle, llamado el TABLOIDE. (edición de Junio 11 del 2016).

2.1 El ingreso de maquinaria agrícola a los cascos urbanos por el **peligro que representa**, es una situación que debe ser regulada por autoridad de tránsito y demarcada o señalizada conforme al Manual de señalización vial, proferido en el año 2015 y adoptado por el Ministerio de Transporte, disposición que en su **numeral 2.3.8**. “*Señales preventivas sobre características operativas de la vía.*” En la que se indica el deber de utilizar la señal denominada técnicamente como: “**SP-45 MAQUINARIA AGRÍCOLA**”, señalización y control vial que buscan la prevención de siniestros viales como el que lamentablemente se produjo y en el que como causa del accidente fue rotulado el código 217 en contra del señor Jair Martínez Vargas, quien conducía la maquinaria agrícola de placa IDZ 96A, indicándose por parte de la autoridad de tránsito el desprendimiento de los vagones que son utilizados por esta clase de maquinaria agrícola para el transporte industrial de la caña de azúcar y que son fuente de peligro para los demás conductores y peatones del sector.

Manual de señalización vial año 2015 – Ministerio de Transporte

2.3.8 Señales Preventivas sobre Características Operativas de la Vía

- PROXIMIDAD DE SEMÁFORO SP-23
- PROXIMIDAD DE PARE SP-29
- PROXIMIDAD DE CEDA EL PASO SP-33
- DOS SENTIDOS DE TRÁNSITO SP-39
- TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO) SP-41
- TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO) SP-43
- **MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA VÍA SP-45**
- ZONA DE PEATONES SP-46
- PROXIMIDAD DE CRUCE PEATONAL SP-46A
- UBICACIÓN DE CRUCE PEATONAL SP-46B
- ZONA ESCOLAR SP-47
- PROXIMIDAD A CRUCE ESCOLAR SP-47A
- UBICACIÓN DE CRUCE ESCOLAR SP-47B
- NIÑOS JUGANDO SP-48
- ANIMALES EN LA VÍA SP-49

SP-45 MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA VÍA

Esta señal se utiliza para advertir al conductor la probable presencia en la vía de maquinaria agrícola autorizada para circular por la vía, cuya lenta circulación o dimensiones pueden ser motivo de peligro. Su uso debe limitarse a los lugares donde es frecuente la circulación de esta maquinaria. Su colocación no debe entenderse como una autorización tácita para el tránsito de esta clase de vehículos, sino como la advertencia de un posible riesgo.



Es decir que la vía y/o sector donde presuntamente ocurrió el hecho no contaba con señales de tránsito que advirtieran el paso de maquinaria agrícola tal y como lo ordena el manual de tránsito, máxime cuando esta señal es casi esencialmente obligatoria que se instale en este tipo de zonas pues advierte a los conductores de los otros vehículos y peatones del constante paso de esta clase de vehículos, lo que los obliga a estar más alertas y atentos cuando transiten por el lugar. Por lo tanto, se evidencia que la omisión que aparentemente causó el daño no se deriva del accionar del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**.

Ahora bien, pese a que existe una clara omisión de la autoridad de tránsito encargada de instalar y mantener esta clase de señales de tránsito, el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** siempre fue atento y cuidadoso con la obligación que le correspondía, esto es el mantenimiento de los vagones, tal y como lo señaló en la audiencia de pruebas celebrada el 28 de agosto de 2024, en la que manifestó lo siguiente:

(...) ¿El tiempo de vida útil? Respondió: No tienen vida útil, son pequeños, les hace el mantenimiento, cada 8 días se revisaba, y anualmente se le cambiaba las barandas, rodamiento, se engrasaba al año, se le cambiaba los pasadores y lo que necesitara el equipo. (...)

Es decir que cumplió con la obligación de realizar el mantenimiento preventivo a los vagones y no se encontró ninguna situación anormal que advirtiera alguna complicación en su funcionamiento. Es decir que no es posible atribuir responsabilidad en cabeza del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** puesto que este fue diligente y cuidadoso en la responsabilidad que le correspondía. Ahora bien, no es posible que el despacho impute responsabilidad únicamente por ser el propietario de los vagones, ya que es necesario que se acredite un actuar descuidado e imprudente y el daño como consecuencia de ello, situación que claramente brilla por su ausencia, pues no fue su actuar el que ocasionó el lamentable hecho.

En esa medida, del análisis del acervo probatorio que milita en el expediente, se advierte que no existe ninguna prueba que acredite la existencia de un nexo causal como presupuesto para la configuración de la responsabilidad civil del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**. Por el contrario, sí se tienen elementos que permiten advertir la fractura o carencia del mentado requisito y que, por contera, infieren la presencia de un eximente de responsabilidad, esto es: el hecho exclusivo y determinante de un tercero y caso fortuito. Encontrándose probada de tal suerte, la inexistencia de responsabilidad civil a cargo del señor TAFUR como consecuencia de la demostración de los eximentes de responsabilidad.

En conclusión, el nexo causal se vio quebrantado ante la configuración de las causales de eximentes de responsabilidad denominado hecho exclusivo y determinante de un tercero y caso fortuito, toda vez que en primer lugar, gracias al "*concepto técnico de accidente de tránsito*"⁶ aportado por la parte actora, se logra evidenciar que, en el sitio, vía y/o sector donde aparentemente ocurrió el accidente no existió señales de tránsito que advirtieran a los transeúntes, conductores y demás, sobre el tránsito constante de maquinaria pesada tal y como se consigna en el manual de señalización el cual se encuentra a cargo de las autoridades locales. En segundo lugar, se trató de un hecho imprevisto porque los vagones previamente ya habían sido sujetos de mantenimiento y

⁶ Concepto técnico de accidente de tránsito, elaborado por Álvaro Hernán Cifuentes Noreña. 18 de diciembre de 2023.

no existió ni dudas sobre su funcionamiento, es decir no se encontró algún elemento que advirtiera alguna inconsistencia. En ese sentido, esta situación exonera de todo tipo de responsabilidad al señor **TAFUR**.

C. SE ACREDITÓ EL HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA COMO EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el material probatorio obrante en el plenario se logra inferir que el accidente de tránsito se debe a un actuar determinante e imprudente del señor **Carlos Enrique Flórez Quintero**, quien desatendió las normas de tránsito dispuestas y provocó exclusivamente la concreción de los perjuicios. Debe considerarse que el conductor incumplió las normas de tránsito dispuestas, conducta que incidió exclusivamente en el resultado dañoso. La culpa de la víctima fue exclusiva, determinante y autónoma a la conducta del tomador del seguro.

Habiendo enfatizado en lo anterior, ruego al Despacho tener en cuenta que el Consejo de Estado ha indicado que, cuando el comportamiento de la víctima ha sido contundente y determinante para el desarrollo de los hechos, como efectivamente se ha suscitado en este asunto, se rompe el nexo causal indispensable para que se configure la responsabilidad administrativa que en estos escenarios se deprecia. Así lo ha manifestado el órgano de cierre de esta jurisdicción⁷:

En cuanto a la alegada eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, conviene recordar que, al igual que acontece con las demás eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. Por otra parte, a efectos de que operen las citadas eximentes de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de la víctima tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.

En ese sentido, se evidencia en el expediente que las actuaciones adelantadas por la víctima fueron determinantes en la ocurrencia del hecho. En este orden de ideas y una vez revisado el documento denominado informe policial de accidente de tránsito, se observa que el agente de tránsito no estableció que, el conductor del triciclo usara adecuadamente el casco de protección, el chaleco o algún elemento de protección. Tal y como se evidencia en la imagen adjunta:

⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado:19001-23-31-000-1995-08005-01 (18376). M.P Dr mauricio Fajardo Gómez

I. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS				VEHÍCULO [2]				
CONDUCTOR/APELIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO		SEXO	GRAVEDAD
Flórez Quintero Carlos Enrique		CC	6209978	Colombiano	DÍA	MES	AÑO	MUERTO
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN	SI	NO	HERIDO	<input type="checkbox"/>
Carrera 27C # 39-23 B/16 Villa 2552 53				AUTORIZÓ	SI	NO	EMBRIGUEZ	GRADO
PORTA LICENCIA		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP	VEN	CÓDIGO OF. TRÁNSITO	CHALECO
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					DÍA	MES	AÑO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		DESCRIPCIÓN DE LESIONES						
Hospital 3el		Procedido de cada Tránsito y control Tránsito						
		lesiones en Hombro con todo Descrito						

Es decir, que la conducta del señor **Carlos Enrique Flórez Quintero** fue determinante para la ocurrencia del hecho, pues incumplió con las normas de tránsito al no usar adecuadamente el casco de protección, exigencia que se encuentra establecida en el artículo 94 del Código de Tránsito así:

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

(...)

Reglamentado por la Resolución del Min. Transporte 1737 de 2004. **Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte.**

La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo. (...) (negrilla y subrayada por fuera del texto original)

En ese sentido, el hecho de la víctima fue determinante en la ocurrencia del hecho que hoy nos ocupa quebrantando así el nexo de causalidad, pues el supuesto daño sufrido y la causación de este se derivan de actuaciones imprudentes e irresponsables adelantadas por la propia víctima y no por el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**. Además, para tener por probada la existencia de responsabilidad, no es suficiente con demostrar la existencia cierta de un daño, sino que debe acreditarse que este es consecuencia de la acción u omisión adelantada por el señor TAFUR. Situación que no ocurre en el caso en concreto, pues tal y como se indicó al inicio de este párrafo, fue el actuar de la propia víctima la que ocasionó el hecho.

En la audiencia de pruebas celebrada, el señor Oscar Londoño quien conducía el vehículo de placas **IDZ96A** señaló lo siguiente:

Relato: Dice que llegó por la mañana al Trapiche, cuando llega a la curva del cementerio, dice que la vía está mala, por eso iba despacio, dice que el sr viene en contravía, cuando los taxistas, le pitan y para, y ve el accidente, llaman la ambulancia, le piden los documentos del tractor, espera a que lleguen los del tránsito, le piden la cedula, el pase, los papeles del vehículo, y se lo entregan a ellos, lo conducen a los patios y maría ángel para hacerle prueba de alcoholemia y sale negativo, y le hacen firmar unos papeles. Pregunta: ¿Que pudo verificar, que persona venia, en qué estado, por donde venia, ¿cuál era el trayecto? Respuesta: El conductor va bajando, y él viene subiendo (la victima que murió), Pregunta: ¿En qué vehículo? Respuesta: Un triciclo de 3 ruedas. Él venia casi por la mitad (la victima). Pregunta: ¿Por qué uno de los vagones lo arroja? ¿Qué paso? Respuesta: Él va normal (conductor), al lado derecho hay unos taxis, y ahí es cuando el

vagón lo arroya (entre paréntesis y subrayado propio)

Así mismo el agente de tránsito en la audiencia señaló que las flechas contenidas en el croquis no correspondían al sentido en el que conducía el occiso sino al sentido de la vía, pues este desconoce en qué sentido se dirigía. Al respeto dijo:

OSCAR LONDOÑO CASTAÑO -AGENTE DE TRÁNSITO: ¿Él venía en la vía del tren, cuál era la trayectoria de ese triciclo? Responde: No se pudo establecer, porque cuando llega al lugar, esas flechas son las posibles trayectorias, pero no puedo identificar en ese momento cual era el sentido el triciclo. (negrilla y subrayado propio)

Por lo anterior, está más que acreditado que fue la víctima, el señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** quien se expuso de manera imprudente e irresponsable a la ocurrencia del hecho, pues transitaba en contravía, por la mitad de los carriles sin tener pericia y cuidado en el manejo, máxime cuando pasa cerca de una maquinaria agrícola que por su gran tamaño tiene puntos ciegos.

En conclusión, no existe responsabilidad a cargo señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** por encontrarse configurada la causal de eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima. Lo anterior, toda vez que, la víctima se expuso imprudente e irresponsablemente a su acontecimiento al conducir el triciclo sin usar el casco de protección como está establecido en el Código de Tránsito. Por lo anterior, fue su propio actuar negligente e irresponsable, que lo expuso de manera concreta a la ocurrencia del hecho y en ese sentido, no habrá argumentos jurídicos para imputar responsabilidad al señor **TAFUR OREJUELA.**

D. SUBSIDIARIA: SE DEBERÁ HACER REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran una o algunas de las pretensiones esgrimidas por los demandantes, de todas maneras, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo el tercero indeterminado y la propia víctima, el señor Carlos Enrique Flórez Quintero. La conducta de los anteriormente señalados fue determinante en la producción del evento materia de controversia, pues, en primer lugar, la autoridad de tránsito competente no señaló la vía con el fin de advertir el paso constante de maquinaria agropecuaria, en segundo lugar, por la víctima transitar sobre una vía sin portar elementos de protección y seguridad tales como casco o reflectivos.

De conformidad con lo señalado en el artículo 2357 del Código Civil que señala lo siguiente:” ARTICULO 2357. <REDUCCION DE LA INDEMNIZACION>. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. (negrilla y subrayado por fuera del texto original).

Aplicación idónea para el caso en concreto, pues en últimas fue la omisión de la autoridad de tránsito competente al no señalar en debida forma la vía y/o sector y la víctima el señor Carlos Enrique Flórez Quintero quien de manera imprudente de irresponsable se expuso a su lamentable acontecimiento.

Conforme a lo dicho, el despacho debe establecer un análisis causal de la conducta implicada en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia del tercero indeterminado, la víctima. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al supuesto daño que sufrieron la aquí demandante. Así es como lo ha indicado la jurisprudencia en reiteradas ocasiones:

De ahí que, la autoridad judicial demandada se encontraba habilitada para estudiar si se configuraba alguno de los eximentes de responsabilidad, entre los que se encuentra, el hecho de la víctima, como efectivamente lo hizo. **Por ello, al encontrar que la actuación de la víctima directa concurrió en la producción del daño, decidió reducir el valor de la indemnización.** De modo que, contrario a lo alegado por el actor, el juez de segunda instancia no desbordó el marco de su competencia y tampoco incurrió en el defecto sustantivo alegado.⁸ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En distinto pronunciamiento, la misma corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 50% de los perjuicios:

Todo ello, en pos de la responsabilidad que por el riesgo creado debe afrontar la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación— **implica que, en merecimiento de la culpa evidenciada de la víctima, se debe efectuar una reducción en la condena, la cual se estima, por el nivel de incidencia de la negligencia de los demandantes** —propietarios de edificio donde funcionaba el centro comercial—, equivalente al 50% de los perjuicios que lleguen a probarse y concederse en favor de estas personas, ya que del mismo tenor del riesgo que reclaman, fue la imprudencia de los demandantes en la no evitación del daño.⁹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Como se lee, el fallador encontró probada la incidencia de la víctima y el tercero indeterminado en la causa generadora del daño en proporción a un 50% y en ese sentido redujo los perjuicios que se probaron en el proceso en el mismo porcentaje. De tal suerte, queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima y del tercero indeterminado, en la ocurrencia del daño por el cual solicita indemnización.

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que la conducta del señor Carlos Enrique Flórez Quintero fue determinante en la producción del evento materia de esta controversia pues se expuso de manera irresponsable a su acaecimiento deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño a lo sumo es del 90%, toda vez que no fue sola la víctima sino también los terceros indeterminados quienes no señalaron en debida forma la vía conforme lo establece el manual de tránsito. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación de la conducta

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. C.P. Milton Chaves García. Radicación 2018-03357

⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicación No. 43112.

imprudente de la víctima en exponerse al peligro y de los terceros indeterminados como mínimo en un 90%.

E. DE LA ORFANDAD PROBATORIA SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS ALEGADOS POR LA PARTE ACTORA – EXCESIVIDAD EN LAS SOLICITUDES INDEMNIZATORIAS - ÁNIMO INJUSTIFICADO DE LUCRO.

Es de común conocimiento que es responsable del resarcimiento del daño quien lo haya producido con su conducta omisiva o activa, en este caso, la imputación fáctica del daño y el nexo de causalidad no pueden ser analizadas desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta de lo que sería el funcionamiento de este tipo de vehículos, sino que requieren ser estudiadas desde un ámbito real que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y los medios técnicos que se realizan al momento de hacer el mantenimiento de estos vehículos y por los argumentos expuestos en párrafos anteriores es claro que el daño que se invoca irrogado por los integrantes del extremo activo, deriva de circunstancias propias de conductas de terceros y de la propia víctima.

A nivel jurisprudencial el Consejo de Estado¹⁰ ha determinado lo siguiente en relación a la carga de la prueba:

OMISION PROBATORIA DE LAS PARTES - Aplicación del principio de autorresponsabilidad de las partes / PRINCIPIO DE AUTORRESPONSABILIDAD - Omisión probatoria / PRUEBA - Carga de la prueba. Aplicación del principio de autorresponsabilidad de las partes Las consecuencias de la omisión probatoria advertida en el plenario obedecen a lo dispuesto por el artículo 177 del C. de P. Civil, de conformidad con el cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, norma que consagra, en estos términos, el principio de la carga de la prueba que le indica al juez cuál debe ser su decisión cuando en el proceso no se acreditan los hechos que constituyen la causa petendi de la demanda o de la defensa, según el caso. **Carga de la prueba sustentada, como ha precisado la Sección, en el principio de autorresponsabilidad de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa exigible a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable.** (...) en el caso concreto resulta evidente que la carga de la prueba recae en quien pretende, de manera que es la parte actora la que debe soportar las consecuencias de su inobservancia o descuido, esto es, un fallo adverso a sus pretensiones relacionadas con las obras e ítems extras y adicionales, pues ese es el efecto que se desprende del hecho de que no obre en el plenario el anexo n.º 1, el pliego de condiciones y la oferta presentada en el proceso de selección adelantado por Ecopetrol. (negrilla y subrayada por fuera del texto original)

Por lo anterior, es la parte actora a quien le correspondía acreditar y corroborar los fundamentos fácticos y pretensiones relacionadas en el escrito de la demanda al operador judicial, sin embargo el mismo brilla por su ausencia, puesto que el actor no se ocupó de probar cuáles fueron las actuaciones antijurídicas, el daño y el nexo causal que fundamentaron la Litis en cabeza del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA.**, máxime cuando se trata de un proceso que debe analizarse bajo los efectos de la falla probada y en razón de la ausencia de material probatorio, el fallador deberá indudablemente negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

¹⁰Sentencia Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. 29 de octubre de 2012. Radicado: 13001-23-31-000-1992-08522-01(21429)

Ahora bien, frente al daño moral, es menester indicar al Despacho que bajo ningún escenario podrá reconocerse la suma de 100SMLMV para cada uno de los demandantes por el fallecimiento del señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** El Consejo de Estado tiene establecido unos baremos para el reconocimiento de perjuicios morales en caso de muerte que corresponden al nivel de relación de parentesco y/o afectividad con la víctima. Sin embargo, nótese que en los testimonios se señaló que el señor Flórez Quintero permanecía “solito”, nunca se le vio con familiares, que estos lo visitaran o cuidaran de él, y que se había separado de la señora María Elida Castaño hace 20 años, es decir, para la fecha de su fallecimiento no mantenía un vínculo afectivo con ninguno de sus familiares.

En la audiencia de pruebas celebrada el día 28 de agosto de 2024, se recibieron los siguientes testimonios y declaraciones:

MARÍA ELIDA CASTAÑO ARIAS

(...) ¿Cuándo se casó con el sr Carlos? Respondió: El 21 de octubre de 1962.

PREGUNTA: ¿Cuándo se separó de él? Respondió: Hace de 20 años, pero no están divorciados (negrilla y subrayada por fuera del texto original)

AURA MILENA QUINTERO

¿Usted durante el tiempo que lo conoció lo vio con familiares de él? Respondió: No, nunca lo vimos acompañado de un familiar, solo le mencionó a la hija que vivía cerca. Nunca se imaginó que tuviera esposa, solo conoció a la de Mileidy. (...) ¿Cuándo le preguntaba sobre familia e hijos? Ella le preguntó sobre su esposa, y él le dijo que llevaba mucho tiempo viviendo solito (negrilla y subrayada por fuera del texto original)

MARIELLY GIRALDO TABARES

¿Conoció a la esposa del sr Carlos Quintero? Respondió: No, nunca le conoció señora (...) ¿Alguna vez vio o pudo constatar que el transportara alguna señora de manera permanente? Respondió. No, andaba solito (...) (negrilla y subrayada por fuera del texto original)

Es decir que se logró desvirtuar la presunción del daño moral en cabeza de todos los aquí demandantes, pues en primer lugar se acreditó que la señora María Elida Castaño se había separado del fallecido hace 2 años e incluso recibe pensión de sobrevivientes por otro esposo, razón por la cual no tiene vocación de prosperidad la solicitud en favor de esta por daño moral, daño emergente ni mucho menos lucro cesante, pues el señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** no proveía económicamente a la señora Castaño.

Así mismo los nietos e hijas no permanecían en contacto constante ni mucho menos cercano con el fallecido por lo que no existe la presunción de dolor, afecto o congoja que pueden haber sufrido los aquí demandantes. Pues el mismo no se puede predicar únicamente por el parentesco sanguíneo, sino que también debe demostrarse su afectación. Máxime cuando con los testimonios anteriormente señalados se quebrantó la presunción que existe frente a estos como parientes de

primer y segundo grado.

Por lo tanto, lo pretendido en la demanda resulta a todas luces excesivo y demuestra un afán de lucro por la parte actora, máxime cuando no logró acreditar con una prueba tan siquiera fehaciente cuáles fueron las afectaciones sufridas por los aquí demandantes y que las mismas sean como causa y consecuencia del actuar u omisión del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**, razón por la cual el Despacho deberá negar esta solicitud al no acreditarse la causación del mismo.

- **Respecto al daño emergente:**

Nunca se probó mediante medios de prueba conducentes, pertinentes y útiles el presunto detrimento patrimonial causado a la señora María Elida Castaño Arias a raíz de la muerte del señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** La demandante de manera exagerada pide la cantidad de 212 SMLMV por concepto de gastos injustificados pues ni siquiera se relaciona y se prueba porque conceptos se solicita este valor. Máxime cuando esta más que acreditado que ellos ya se habían separado hace más de 20 años, es decir no convivían por lo que no existían un vínculo como para que la señora María Mérida asumiera algún costo por su fallecimiento.

- **Respecto al Lucro cesante:**

Es menester indicar al despacho que no hay lugar al reconocimiento de indemnización a título de lucro cesante, toda vez que la parte actora pretende el reconocimiento de dicho perjuicio sin cumplir con la carga probatoria que le correspondía, pues no se aportó un elemento material fehaciente, como contrato laboral, desprendibles de pago de salario, transferencia bancaria, afiliación al Sistema General de Seguridad Social, u otro medio probatorio que vislumbraran al despacho sobre la supuesta vinculación laboral que en vida tenía señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** ya que esta no puede ser susceptible de presunción. Por lo tanto, al no acreditarse la supuesta actividad económica que desempeñaba señor **Flórez Quintero q.e.p.d.** deberá negarse dicha pretensión. Máxime cuando no acreditó que este fuese el encargado de proveer económicamente a la señora María Mérida Castaño, pues estos no convivían hace más de 20 años.

Así mismo es importante señalar que no es cierto que el señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** transportara en su “triciclo” a la señora María Elida Castaño Arias a cumplir unas supuestas citas médicas, toda vez que se acreditó con el material probatorio recaudado en especial los testimonios, que ellos ya no vivían juntos y que se encontraba separados hace más de 20 años. Por lo que no se acreditó el supuesto apoyo que tenía el fallecido con la señora María Elida.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que la parte actora solicita que se reconozca el lucro cesante en favor de su supuesta esposa María Mérida Castaño sin tan siquiera acreditar la dependencia económica. Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia del 29 de octubre de 2018⁷ ha reiterado que debe **demostrarse la dependencia económica** para la obtención de indemnización por Lucro Cesante, tal y como se señala en la siguiente sentencia:

(...) Si bien la inferencia a la que se acaba de hacer alusión admite prueba en contrario, en orden a demostrar la improcedencia del reconocimiento económico por dependencia económica, lo cierto es que la parte demandante no lo acreditó (...) De lo dicho por los testigos solo se puede concluir que el difunto vivía con su esposa, sus hijas y nietos, pero

no indicaron algún detalle acerca de cuál era la ayuda económica que les prodigaba. No se probó que las demandantes carecieran de un empleo o una actividad económica independiente, una prestación social (pensión) u otro tipo de ingreso y que solo dependieran de la ayuda de su padre. Tampoco se demostró que la señora (...) se encontrara en una situación incapacitante derivada de una enfermedad o invalidez o en otra situación similar que le impidiera realizar una actividad económica. (...) (negrilla y subrayado por fuera del texto original)

Situación que no ocurre en el caso en concreto, pues la aquí demandante no allegaron una prueba tan siquiera sumaria que acreditara que la esposa dependiera económicamente del señor **Carlos Enrique Flórez Quintero q.e.p.d.** Máxime, cuando ni siquiera se aportaron pruebas que acreditaran que el fallecido se encontraba desarrollando una actividad económica y que la sostuviera económicamente.

En conclusión, es evidente que no se avizoran en el expediente pruebas que acrediten, que la señora María Mérida Castaño dependieran económicamente del fallecido, máxime cuando se acreditó que ellos hace más de 20 años se habían separado y que no convivían juntos, por lo que existió una separación de cuerpos que da fin al matrimonio de acuerdo al Código Civil.

CAPÍTULO III. ANÁLISIS FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA REALIZADO POR EL SEÑOR EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA

Es menester manifestar al despacho que la vinculación de mi prohijada **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** se dio a través del llamamiento en garantía formulado por el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** por el contrato de seguro documentado en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016. Así las cosas, la mera vinculación de una aseguradora al proceso en virtud de unos contratos de seguros existentes no genera implícitamente que la póliza deba afectarse, cuando es obligatorio que se cumplan las condiciones particulares y generales de la misma.

Ahora bien, en el hipotético y eventual caso en que se acceda favorablemente a las pretensiones del extremo activo en este litigio, se precisa advertir cuáles fueron las condiciones generales y particulares pactadas en el contrato de seguro que sirvió de base para efectuar el llamamiento en garantía contra mi representada, pues son esas las que definen el amparo otorgado, las exclusiones, el límite asegurado o suma asegurada, el deducible y las demás estipulaciones del aseguramiento, las cuales se constituyen como las únicas pautas contractuales que determinan el marco de las obligaciones de las partes en el contrato de seguro, advirtiendo desde ya que la misma no presta cobertura temporal. Por lo tanto, de ella se puede establecer qué eventos generan o no obligación a cargo de la aseguradora, entendiendo incorporado en todo este contexto el régimen legal vigente a la celebración del contrato.

Por lo cual, se solicita al despacho la desvinculación de mi prohijada la **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** debido a lo siguiente:

A. SE PROBÓ LA INEXIGIBILIDAD DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DEL BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE MAQUINARIA Y EQUIPO No. 03299.

No existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez en primer lugar, no se acreditó en el expediente que los vagones que supuestamente ocasionaron el hecho del 7 de junio de 2016 fuesen los que se encuentran asegurados en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016. En segundo lugar, no se acreditó la responsabilidad del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA**. Lo anterior por cuanto se desconoce las características exactas de los vagones que supuestamente se soltaron y colisionaron el fallecido. Así mismo, el actor no cuenta con pruebas fehacientes para determinar la causación de los supuestos daños materiales e inmateriales sufridos a cargo del señor TAFUR. Por el contrario, se encuentra acreditado que la causa del hecho obedece a omisiones de terceros, esto es de la falta de señalización de la vía por parte de la autoridad competente y en segundo lugar por culpa exclusiva de la víctima quien se expuso de manera imprudente a la ocurrencia del hecho. Por lo tanto, no se acreditó dentro del plenario ningún elemento demostrativo útil, conducente y pertinente que permita atribuir falla, omisión o retardo del señor TAFUR, que derive en un daño causado a los demandantes.

En este orden de ideas, en concordancia con todo lo referenciado a lo largo del presente escrito, se propone este alegato toda vez que el **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** no está obligada a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro. Así entonces, es necesario señalar que, al tenor de las condiciones generales documentadas en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016, el amparo que se pretende afectar con la presente acción se pactó así:

La cobertura otorgada cubre el dano material por eventos descritos y que sean de caracter accidental, subitico e imprevisto, exceptuando las exclusiones descritas en el condicionado de la poliza y en las condiciones particulares contenidas en este documento.

Partiendo de lo anterior, es válido afirmar que el riesgo trasladado que consiste en el amparo de los perjuicios causados a un tercero derivado directamente del daño material causado directamente por los tractores señalados en el interés asegurable, estos son:

INTERES ASEGURABLE VALOR ASEGURABLE
TRACTOR FORD 7610 MOTOR 9H12BVE125378 PLACA LTO39 (7.610 # 1).
Modelo 1999 color azul USD 15.256,80
10 VAGONES MEDIDA 1.70 X 1,50 Mts, ALTO 3.10 Mtgs, COLOR AMARILLO
NEGRO USD 3.390,40
TRACTOR FORD 6610, PLACA TNG85A (6.610) modelo 1987 color azul
USD 8.476,00
TRACTOR FORD 7610 MOTOR VE 122956 PLACA ICB11A MODELO 1989 COLOA
AZUL (7.610 #2) USD 15.256,80

Por lo anterior, ante la ausencia de elementos materiales probatorios que acrediten que los vagones involucrados en el hecho son los anteriormente señalados asegurados en el contrato de seguro, la póliza no se podrá afectar pues esto valida la no se realizó el riesgo asegurado.

En conclusión, al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad del asegurado y la certeza que los vagones involucrados en el hecho eran los efectivamente asegurados, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016 que sirvió como sustento para llamar en garantía a mi representada. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la aseguradora.

B. SE ACREDITÓ LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR NO MEDIAR INTERÉS ASEGURABLE.

Es importante señalar que con las pruebas recaudadas en el expediente se logra evidenciar que el vehículo de **placas IDZ96A** no se encuentra asegurado en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016 con la cual se llamó en garantía al **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** Pues tal y como se evidencia de la simple lectura de la caratula del contrato de seguro, se acredita que este vehículo no se encuentra asegurado, por lo que las omisiones y acciones que haya ejecutado estos y se deriven en una responsabilidad no son objeto de indemnización por la compañía aseguradora.

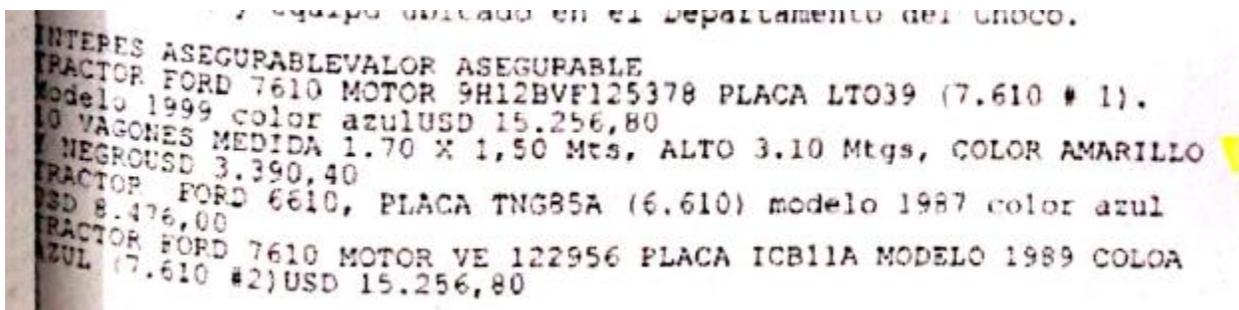
El artículo 1045 del Código de Comercio señala lo siguiente:

ARTÍCULO 1045. ELEMENTOS ESENCIALES. Son elementos esenciales del contrato de seguro:

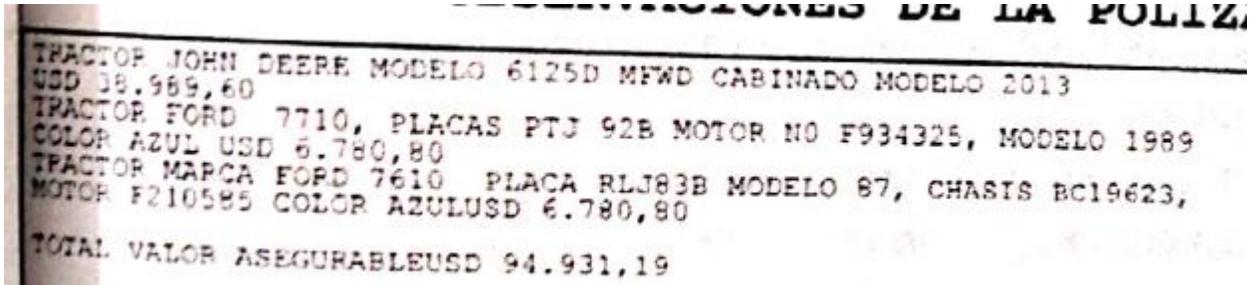
- 1) **El interés asegurable;**
- 2) El riesgo asegurable;
- 3) La prima o precio del seguro, y
- 4) La obligación condicional del asegurador.

En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno. (negrilla y subrayada por fuera del texto original).

En ese orden de ideas, es necesario traer a colación las particularidades de la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016, en el acápite de interés asegurable donde se consignó lo siguiente:

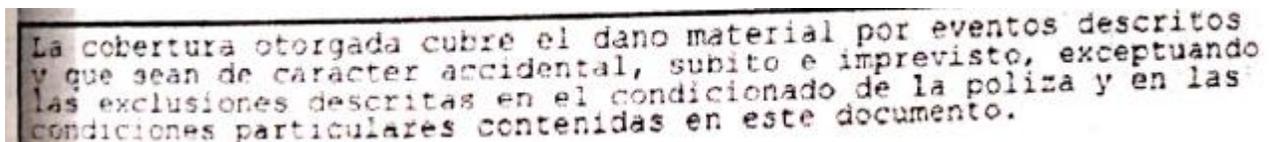


INTERES ASEGURABLE VALOR ASEGURABLE
TRACTOR FORD 7610 MOTOR 9H12BVF125378 PLACA LTO39 (7.610 # 1).
Modelo 1999 color azul USD 15.256,80
10 VAGONES MEDIDA 1.70 X 1,50 Mts, ALTO 3.10 Mtgs, COLOR AMARILLO
Y NEGRO USD 3.390,40
TRACTOR FORD 6610, PLACA TNG85A (6.610) modelo 1987 color azul
USD 8.476,00
TRACTOR FORD 7610 MOTOR VE 122956 PLACA ICB11A MODELO 1989 COLOA
AZUL (7.610 #2) USD 15.256,80



Como se logra observar no se aseguró la responsabilidad del vehículo de placas IDZ96A máxime cuando este ni siquiera se encuentra a nombre del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** si no de un tercero denominado “William Andrés Murillo” el cual no fue parte del negocio contractual materializado en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299**.

Así mismo, es importante señalar que la cobertura de la póliza es para maquinaria y equipo, tal y como se evidencia en la imagen adjunta extraída del texto original que reposa como prueba en el plenario:



Es decir que con ello se afianza más la teoría indicada en este alegato por el suscrito que se baza en la falta de interés asegurable del vehículo de placas IDZ96A en la póliza utilizada por el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** para llamar en garantía a la aseguradora.

En conclusión, no es factible una condena en contra de la aseguradora con cargo al vehículo de placas IDZ96A toda vez que el mismo no se encuentra asegurado en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016, así mismo tampoco en cabeza del señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** pues este no es el propietario del vehículo involucrado en el hecho aquí reprochado tal y como se acreditó con el material probatorio.

C. EN TODO CASO DEBERAN TENERSE ENCUENTRA LAS EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE MAQUINARIA Y EQUIPO No. 03299.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera: “*Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos*

señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro¹¹.

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro. Razón por la cual, es menester señalar que la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016, señala una serie de exclusiones, las cuales solicito aplicar expresamente al caso concreto.

EXCLUSIONES GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES:
En adición a las exclusiones generales y particulares de la póliza, se deja expresa constancia que también aplican las relacionadas a continuación:
?Coberturas plurianuales.
?Equipos con mas de 30 años de edad, contados desde el año de fabricación del equipo en su país de origen.
?Abandono de los bienes asegurados.
?Rotura de maquinaria, dano interno y/o desgaste por uso.
?Blow out, Cratering

Se excluye dano electrico o cualquier falla causada por el desgaste natural del vehiculo o a la deficiencia del servicio de lubricacion o de mantenimiento. Sin embargo, las perdidas o danos consecuenciales que sufra el vehiculo, estaran imputadas bajo la póliza, sujeto a la demostracion del correcto mantenimiento.

En el evento que se llegue a determinar dentro del proceso que existe responsabilidad del asegurado **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** por que los vagones presentaron fallas, o rotura de máquina, daño interno y/o desgaste debe señalarse que los mismos se encuentran plenamente excluidos y la póliza no podrá afectarse.

Así mismo, nótese que en las exclusiones se indicó que al propietario de los vehículos y maquinarias aseguradas le estaba prohibido dárselo a otra persona para operarlo. Al respecto se pacto lo siguiente:

?Se excluye cualquier defecto de diseño.
?Se excluyen equipos dados en alquiler o prestados por el Asegurado a terceros sin importar la modalidad. Esta exclusion no aplica para equipos alquilados a personas juridicas siempre que los equipos sean operados y el mantenimiento sea efectuado por empleados del asegurado, ni en los casos en que el asegurado haga parte de uniones Temporales y/o Consorcios legalmente constituidos siempre y cuando los equipos sean operados por algun empleado de la union Temporal y/o Consorcio, mientras cumplan con las garantias y/o exclusiones aqui consignadas o que figuren en las condiciones generales y particulares de la póliza.
?Se excluye cualquier equipo sin documentos legales o no registrado bajo los requerimientos legales de transito o utilizado para cualquier actividad ilegal.
?Se excluye cualquier dano o defecto del equipo notado previamente al inicio de la póliza y detallado en el reporte de inspeccion.
?Se excluye cuando el equipo afectado es capturado y/o usado por cualquier autoridad legal incluyendo los danos causados por la autoridad competente.
?Se EXCLUYE la maquinaria y/o equipo de mineria ubicada en los departamentos de Antioquia, Caqueta, Choco, Casanare, Putumayo, Vichada, Guainia, Vaupes, Guaviare y Amazonas.
?Maquinaria y equipo ubicado en el Departamento del Choco.

¹¹ Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020.

Y de acuerdo a lo probado en el presente asunto, se tiene que el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** contrató al dueño del tractor y este a su vez al conductor para que movilizara sus vagones, situaciones que se encuentra totalmente excluida del contrato de seguros. Por lo tanto, la póliza no podrá afectarse.

Por otro lado, si bien la Circular Básica Jurídica establece que las exclusiones deben constar en la primera página de la póliza y en caracteres destacados, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de unificación No. SC328 del 21 de septiembre de 2023 ha aclarado que lo necesario es que deban empezar en la primera página de la póliza, más no de su carátula, y en caracteres destacados para que tengan eficacia. Criterios que se cumplen dentro del proceso, pues las exclusiones se encuentran desde la primera página del condicionado en caracteres destacados de forma ininterrumpida.

Lo anterior, en estricto cumplimiento del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

Artículo 184. Régimen de pólizas y tarifas.

(...)

2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias:

- a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva;
- b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y
- c. **Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza. (negrilla y subrayado por fuera del texto original).**

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil mediante la sentencia de unificación No. **SC328 del 21 de septiembre de 2023**, señaló que:

Ahora bien, con el propósito de aquilatar la hermenéutica de la norma en cuestión, debe recordarse que, conforme lo establece el artículo 1046 del Código de Comercio, se denomina póliza al documento que recoge el contrato de seguro. Esta póliza en sentido amplio contiene, como se ha visto, (i) la carátula, en la que se consignan las Por lo que tal, condiciones particulares del artículo 1047 ibídem y las advertencias de mora establecidas en los cánones 1068 y 1152 del mismo Código; (ii) el clausulado del contrato, que corresponde a las condiciones negociales generales o clausulado general; y (iii) los anexos, en los términos del artículo 1048 ejusdem.

En ese sentido, se insiste en que el ordenamiento mercantil diferencia con claridad la carátula de la póliza de la póliza misma, y que, dada esa distinción, no cabe sostener que la regla del precepto 184 del ESOF debe cumplirse incluyendo los amparos básicos y las exclusiones, «en caracteres destacados» en la referida carátula.

Cuando la norma en cita alude a «la primera página de la póliza» debe entenderse que se refiere a lo que esa expresión significa textualmente, es decir, al folio inicial del clausulado general de cada seguro contratado, pues es **a partir de allí** donde debe quedar registrado, con la claridad, transparencia y visibilidad del caso, uno de los insumos más relevantes para que el tomador se adhiera, de manera informada y reflexiva, a las condiciones negociales predispuestas por su contraparte: la delimitación del riesgo asegurado.

Conforme a lo anterior, las exclusiones son eficaces siempre que consten en caracteres destacados y comiencen a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza, tal y como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia; exigencia que se cumple en el caso de marras, toda vez que las exclusiones fueron estipuladas a partir de la primera página de las condiciones generales de la póliza.

Sobre la ubicación de las exclusiones pactadas en el instrumento asegurativo, en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de la referida entidad, se reafirmó la postura realizando una regulación de la emisión de las pólizas y del contenido que estas debían tener, así:

1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros:

Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información:

1.2.1.1. En la carátula:

1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Co.

1.2.1.1.2. En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión, el contenido del inciso 1º del art. 1068 del C.Co. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal.

1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones)

Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral. (Negrilla fuera de texto).

En ese sentido, la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, es completamente clara, pues indica que los amparos y exclusiones deben consignarse a partir de la primera página de la póliza, esto es, no de forma restrictiva en la carátula de la misma, puesto que, por razones prácticas, por imposibilidad física, y por las indicaciones legales referidas, no es viable que confluyan en esta misma página del contrato de seguro. De hecho, la misma Superfinanciera a través de su Dirección Legal dio respuesta a consulta formulada por el Representante Legal de Liberty Seguros el pasado 04 de febrero de 2020 (Superintendencia Financiera de Colombia, Radicación No. 2019153273-007-000, trámite: Consultas específicas, remitente: 334000 – DIRECCIÓN LEGAL DE SEGUROS, firmado por Luz Elvira Moreno Dueñas, Director Legal de Seguros), conceptuando lo siguiente:

Bajo esta línea de interpretación, debe entenderse que en aquellos casos en que en consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza, como lo precisa la instrucción de este Supervisor.

Es preciso enfatizar que la Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

Conforme a lo anterior, y a su clara condición de organismo estatal regulador de la actividad financiera y aseguradora, que por tanto ejerce la supervisión de manera idónea, es que el Decreto 2739 de 1991, en su artículo 3.3, estableció como una de sus funciones, la siguiente:

Emitir las órdenes necesarias para que las entidades sujetas a la inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.

De acuerdo entonces a la función pública que realiza esta entidad es claro que sus conceptos y las circulares que expide tienen un fin orientador, claramente de carácter vinculante, no siendo coherente que expida una circular que vaya en desmedro de los intereses de los asegurados, tomadores o beneficiarios en el contrato de seguro.

En conclusión, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones arriba señaladas o las que constan en las condiciones generales y particulares de la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

D. SE ACREDITÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO.

Para la fecha de la realización del llamamiento en garantía al **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.**, la posibilidad que tenía señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** de exigir la afectación de la póliza que se vincula en esta contienda, como consecuencia de los supuestos perjuicios derivados del hecho ocurrido el día **7 de junio de 2016** había sido aniquilada por la configuración del fenómeno prescriptivo, puesto que, el término para hacerlo feneció el **septiembre de 2018**, realizándose el llamamiento en garantía a mi representada por fuera de ese periodo de tiempo, solo hasta el 18 de diciembre de 2018.

El fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro tiene como finalidad sancionar al asegurado y/o interesado negligente que no inicia las acciones necesarias para obtener la indemnización de un hecho dentro del término consignado en la ley comercial aplicable. De forma general, el término de prescripción del contrato de seguro se consagra en el artículo 1081 del Código de Comercio, en el cual se puede leer:

“(…) PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

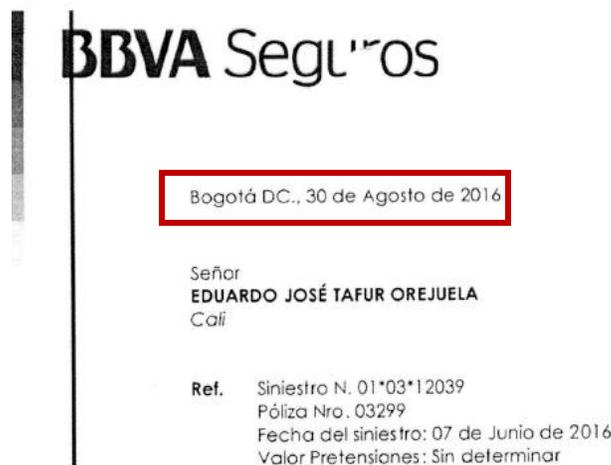
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes (...)” Negrilla fuera del texto original.

Como puede evidenciarse de lo transcrito, en materia de seguros, el término de prescripción se divide en dos clases: ordinaria y extraordinaria. Para su aplicación, lo cierto es que el interesado no podrá alegar indistintamente cualquiera de las dos, según su conveniencia. Si no, por el contrario, operará la primera de ellas, sea ordinaria o extraordinaria, que se configure de conformidad con los presupuestos de hecho del caso concreto.

Al analizar el artículo transcrito, en contraste con el artículo 1081 del Código de Comercio precitado, es posible advertir de la documentación aportada en el plenario, que el término prescriptivo bianual comenzó a correr para el asegurado llamante en garantía, desde el **30 de agosto de 2016**, fecha en la cual el **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** objetó la reclamación presentada por el asegurado, Tal y como se observa a continuación:



Así las cosas, se tendría que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio, el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** tuvo la oportunidad de llamar en garantía a mi representada en virtud del contrato de seguro suscrito y por los hechos que motivan la petición de pago, hasta antes del **1 septiembre de 2018**, (esto es, transcurridos dos años desde la objeción presentada por el BBVA), entendiéndose a toda luz extemporáneo el llamamiento en garantía formulado hasta diciembre 18 de 2018.

En conclusión, manifiesto que, para la fecha de la realización del llamamiento en garantía al **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** la posibilidad que tenía el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** de exigir la afectación de la póliza que se vincula en esta contienda, como consecuencia de los supuestos perjuicios derivados del hecho ocurrido el día 7 de junio de 2016 había sido aniquilada por la configuración del fenómeno prescriptivo, puesto que, el término para

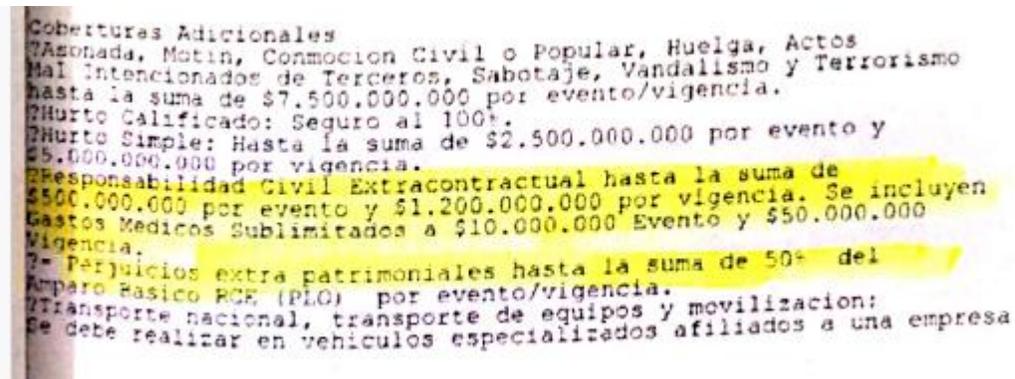
hacerlo feneció en **septiembre de 2018**, realizándose el llamamiento en garantía a mi representada por fuera de ese periodo de tiempo, hasta el 18 de diciembre de 2018, **siendo necesario por tanto que se desvincule a mi procurada de este proceso.**

E. EN EL REMOTO EVENTO QUE EL DESPACHO PROFIERA SENTENCIA CONDENATORIA, DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS LÍMITES Y SUBLÍMITES PACTADOS EN LA PÓLIZA DE MAQUINARIA Y EQUIPO No. 03299.

Tal y como se demostró en el plenario, las condiciones determinadas en el contrato de seguro son obligaciones contraídas por la compañía aseguradora exclusivamente expresadas en su texto, las cuales por ningún motivo el despacho podrá desconocer. En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1079 del Código de Comercio, el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que en la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:



Coberturas Adicionales
3-Asonada, Motín, Comocion Civil o Popular, Huelga, Actos
Mal Intencionados de Terceros, Sabotaje, Vandalismo y Terrorismo
hasta la suma de \$7.500.000.000 por evento/vigencia.
2-Hurto Calificado: Seguro al 100%.
2-Hurto Simple: Hasta la suma de \$2.500.000.000 por evento y
\$5.000.000.000 por vigencia.
3-Responsabilidad Civil Extracontractual hasta la suma de
\$500.000.000 por evento y \$1.200.000.000 por vigencia. Se incluyen
Gastos Medicos Sublimitados a \$10.000.000 Evento y \$50.000.000
Vigencia.
3- Perjuicios extra patrimoniales hasta la suma de 50% del
Amparo Basico RCE (P.L.O) por evento/vigencia.
3-Transporte nacional, transporte de equipos y movilizacion:
Se debe realizar en vehiculos especializados afiliados a una empresa

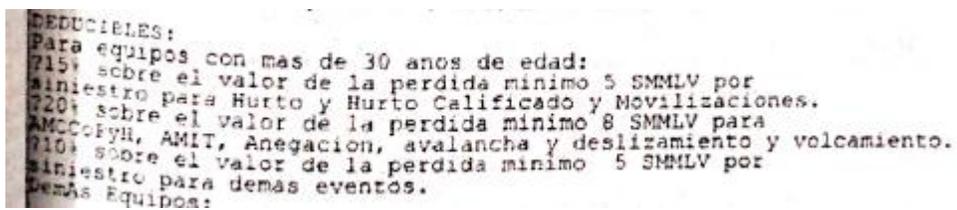
Conforme a lo señalado anteriormente, cualquiera de los límites y sublímites señalados anteriormente podría eventualmente ser afectado una vez verificada las condiciones particulares y generales de las cuales pende el contrato de seguro. En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados, **disponibilidad de la suma asegurada** y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

Adicionalmente es importante señalar, que la póliza a pesar de tener un límite máximo se pactó un sublímite del 50% del valor asegurado total de la póliza los perjuicios extrapatrimoniales, los cuales bajo ningún escenario podrán ser desconocidos por el despacho.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada este alegato denominado “*Límites y sublímites máximos de responsabilidad del asegurador y condiciones de la Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299*”, los cuales enmarcan las obligaciones de las partes, planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

F. NO DEBE DESCONOCERSE LA EXISTENCIA DEL DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA DE MAQUINARIA Y EQUIPO No. 03299.

En gracia de discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que de la eventual obligación de mi procurada se debe descontar el deducible pactado. Debe tenerse en cuenta que el deducible corresponde a la fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta el asegurado, el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** y, en este caso para la póliza, se pactó en **el valor de la pérdida MIN 5SMLNV**, como se observa:



DEDUCIBLES:
Para equipos con mas de 30 años de edad:
715% sobre el valor de la pérdida mínimo 5 SMMLV por
siniestro para Hurto y Hurto Calificado y Movilizaciones.
720% sobre el valor de la pérdida mínimo 8 SMMLV para
AMCCOBYH, AMIT, Anegacion, avalancha y deslizamiento y volcamiento.
710% sobre el valor de la pérdida mínimo 5 SMMLV por
siniestro para demas eventos.
Demas Equipos:

El deducible, el cual está legalmente permitido, encuentra su sustento normativo en el artículo 1103 del Código de Comercio, el cual reza que: “(...) *Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original (...)*”

En síntesis, el deducible comporta la participación que asume el asegurado cuando se presenta el siniestro, el cual se manifiesta en un valor o porcentaje pactado en la póliza de seguro.

Por consiguiente, debe tenerse presente que, una vez se encuentre fehacientemente probado el evento asegurado, el Juez deberá, al momento de atribuir responsabilidades sobre la indemnización del presunto daño antijurídico causado, aplicar el monto que, al asegurado **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** le correspondería cubrir en virtud del deducible pactado. Se aclara además que en vista de que se pactó un porcentaje y una suma específica, deberá aplicarse, de acuerdo a lo estipulado en la póliza, el que una vez calculado sea mayor.

En conclusión, si en la causa bajo su conocimiento ocurre el improbable caso de endilgarse responsabilidad a la demandada y asegurada y a mi mandante se le hiciera exigible la afectación del aseguramiento, el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** tendría que cubrir el monto anteriormente indicado como deducible. Empero, tampoco puede olvidarse que esto es sólo posible en el hipotético de que el señor TAFUR sea hallado patrimonialmente responsable de conformidad

con las pruebas allegadas el proceso. Lo cual, analizado el expediente, considera el suscrito es altamente improbable, como quiera que, en el asunto de marras, no existe responsabilidad frente al referido señor TAFUR.

G. PAGO POR REEMBOLSO

Sin que el planteamiento de este alegato constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada. Se solicita al honorable juez que, en el remotísimo caso de encontrar responsable al asegurado y de llegar a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo a los demandantes, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena.

Adicionalmente, se señala al despacho que la obligación de pago de la compañía aseguradora es únicamente indemnizatoria más no solidaria, máxime cuando esta obligación surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado, con sujeción a las condiciones de cada póliza; en virtud de ello, es válido afirmar desde ya que, de conformidad con la exposición previa, no le asiste a mi representada en todo caso la obligación de hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual, clínicas y centros médicos vinculada en esta contienda, toda vez que el acaecimiento del riesgo asegurado y otorgado en la misma, no se ha demostrado y se tiene que esta no se afectaría como resultado de la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad indemnizatoria taxativamente determinada en la caratula de las misma.

Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, **sino por reembolso o reintegro**, a la entidad asegurada, en virtud del contrato de seguro existente.

CAPÍTULO V. PETICIÓN

En mérito de lo expuesto, de manera respetuosa, ruego:

PRIMERO: Negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando probadas las excepciones de fondo y mérito presentadas por nuestro asegurado, el señor **EDUARDO JOSÉ TAFUR OREJUELA** y en consecuencia absuelva al **BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.** al pago alguno por conceptos de indemnizaciones por los supuestos perjuicios alegados.

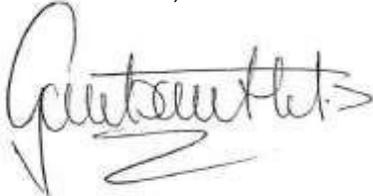
SEGUNDO: En el remoto evento en que los argumentos esbozados en el presente escrito no fueran

de su convencimiento, no pierda de vista la **falta de legitimación en la causa por no mediar interés asegurable, la configuración de las exclusiones y la inexigibilidad de la compañía por la falta de acreditación del riesgo asegurable** de la **Póliza de Maquinaria y Equipo No. 03299** cuya vigencia corrió desde el 5 octubre de 2015 al 5 de octubre de 2016, así como las exclusiones, limitaciones y deducibles plasmadas en ella, esto, de conformidad con las consideraciones expuestas por mi defendida desde la contestación del llamamiento en garantía y reiteradas en esta oportunidad procesal.

CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES

Al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 oficina 212 de la Ciudad de Cali (V), correo electrónico: **notificaciones@gha.com.co**

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.